

Cañete, dos de marzo de dos mil veintidós.

VISTO, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, entre los días 22 y 24 de febrero de 2022, ante la Segunda Sala de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, integrada por los jueces don Ricardo Andrés Piña Vallejos, quien presidió la audiencia, don Jaime Rodrigo Vejar Carvajal y don Marcos Antonio Pincheira Barrios, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral, seguido en contra de **JORDAN ALEXANDER VILLANUEVA SALAS**, cédula nacional de identidad N° 18.417.633-5, con domicilio en pasaje José Muñoz Muñoz N° 1056, Lebu, representado por los abogados defensores penales públicos, doña Catalina Poblete Pérez y don Pedro Aguilera Soto.

Fue parte acusadora en esta causa el ministerio público, representado por la fiscal doña Carolina Bucarey Morales, y como querellante, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, adhiriendo a la acusación fiscal.

SEGUNDO: Que, se sostuvo acusación por los siguientes hechos:

“El día 01 de febrero del año 2019, en horas de la madrugada en el interior del domicilio ubicado en la población 27 de Febrero calle Jorge Carvajal Pinto nro. 1532 Comuna de Lebu, el imputado Jordan Villanueva Salas, ya individualizado, luego de sostener una discusión con su ex conviviente y madre de su hijo LISETTE DAYANA RIFFO CAYUPAN, la agrede reiteradamente con golpes de puños en el rostro, tomándola fuertemente del pelo, para luego y producto de los

gritos que la víctima realizaba, agredirla con un trozo de madera en su cabeza y enseguida provisto de un cuchillo tipo cocinero apuñalarla en reiteradas ocasiones en el cráneo, hombro, rostro y brazo izquierdo, procediendo luego y con el mismo cuchillo provocarle un profundo y extenso corte a la altura de su garganta, lesiones que finalmente le provocaron la muerte como consecuencia de un traumatismo cervical complicado, procediéndose éste luego a bañarse, limpiándose de esta forma de las manchas de sangres con las que había quedado, abandonando el inmueble, trasladándose luego hasta la casa de su padres" (*sic*).

Los hechos descritos, a juicio del ministerio público, configuran el delito consumado de femicidio, previsto y sancionado en los artículos 390 y 390 bis del Código Penal (*sic*).

En cuanto a la participación del acusado, se le atribuye la calidad de autor ejecutor directo, del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

En lo referente a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se reconoce la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal; y como agravantes, las del artículo 12 N° 1 y 390 quáter N° 4 del mismo cuerpo legal.

El ministerio público solicitó la imposición de la pena de presidio perpetuo, como autor del delito de femicidio, accesorias legales y costas.

TERCERO: Que, en su **alegato de apertura**, la defensa del acusado manifiesta que ciertamente se ha expuesto un caso

complejo, pues los hechos del 1 de febrero de 2019 cambiaron la vida de toda una familia, de doña Lisette, de don Jordan, de su hijo, de toda una comunidad que se vio afectada. No pretende restar la importancia ni la gravedad de los hechos, pues la legislación ha establecido penas bastante duras para estos ilícitos. Tiene claro que estamos en presencia de uno de los hechos más complejos y graves de nuestra legislación. Desde esta perspectiva, lo que hará la defensa es centrarse en antecedentes objetivos, relativos al hecho materia de la acusación fiscal y la evidencia que el ministerio público aportará. Hay circunstancias que, por la naturaleza del ilícito, no discutirá, como la participación del acusado en los hechos que se le imputan. Sin embargo, se debe tener claridad sobre cómo ocurren los hechos y cómo se van desarrollando: cómo ocurrió este hecho, qué lo detonó, cómo respondió el acusado y cómo participó. Se acreditará que durante la investigación su representado participó de forma activa en el esclarecimiento de los hechos. Don Jordan, un joven de 25 años a la fecha de los hechos, con una relación larga; prácticamente desde la adolescencia conocía a quién era la madre de su hijo, circunstancias personales que cree deben tenerse presente. Invita a entender por qué una persona reacciona de la forma en que lo hizo el acusado, lamentable, por cierto, pues se ha perdido una vida y se han destruido otras, incluida la de su representado. Insiste en tener presente estas circunstancias, para comprender cómo una persona que no teniendo ningún antecedente penal, termina cometiendo uno de los delitos más graves de nuestra legislación, sin pretender justificarlo, pues hay cosas que

no se pueden justificar; pero sí que se tenga presente el cómo ocurrieron los hechos, para que reciba una sanción ajustada a derecho. Llama a tener presente tres puntos: 1) su defendido no tenía anotaciones pretéritas, hecho reconocido en la misma acusación; 2) colaboró con la justicia, pudiendo eludir su acción, como en muchos otros casos a nivel nacional, en delitos de esta naturaleza. No se dio a la fuga, se fue donde sus padres, quienes llamaron a Carabineros, porque él lo pidió. Cuando llegó la policía, en estado de *shock*, no caviló, por lo que entiende deberá configurarse la atenuante del artículo 11 N° 8 del Código Penal. Además de haberse él mismo denunciado, los guió a la casa donde vivía y ocurrieron los hechos y declara. Previene que habrá de ver la declaración, si esta fue palabra por palabra o en definitiva fue lo que los carabineros le preguntaban y él respondía asintiendo; como quiera que sea, él confesó el mismo día. Insiste en que se consideren los antecedentes objetivos, como debe ocurrir en el Derecho penal. Las circunstancias personales de su representado, por qué actuó así, sin tener otras causas previas, siendo un buen padre de familia, preocupado de su hijo. Estos hechos ocurren en un contexto de consumo de alcohol y demostrará que el acusado tenía antecedentes psicológicos previos que le hacían tener un bajo o escaso control de impulsos. Se escuchará de su representado y de su prueba pericial, como concurrían circunstancias relativas a su capacidad intelectual, gravitantes al momento de dictar un veredicto condenatorio; se escuchará en tal sentido al psicólogo de la defensa, don César González. 3) Se debe tener también presente algunas circunstancias penales,

como es la irretroactividad de la ley penal. La Ley N° 21.212, de fecha 4 de marzo de 2020, crea las modificaciones al Código Penal e incorpora el artículo 390 quáter. Por la aplicación temporal de la ley penal, no es posible aplicar una ley posterior a un hecho anterior, más perjudicial para el acusado, por muy deleznable y grave que sea el hecho, impidiéndolo el artículo 18 del Código Penal. Por tanto, entiende que la agravante del artículo 390 quáter N° 4 del Código Penal, es improcedente, por la aplicación de la ley penal en el tiempo, ello con independencia de normativa internacional como la Convención de Belém do Pará y todo lo que ello implica como compromiso del Estado chileno. Uno de los pilares del debido proceso es la certeza jurídica, en el sentido de que la legislación posterior no es aplicable a un imputado cuando esta agrava la circunstancia de comisión de un hecho ilícito, como es el caso. Por lo mismo, entiende que no se configura la agravante del artículo 12 N° 1 del Código Penal, que en nuestra legislación se define a la manera clásica, como obrar a traición o sobre seguro, sin que exista prueba que permita acreditar esa circunstancia, pues ello requiere antecedentes objetivos de una preparación previa, que el imputado haya tenido la posibilidad de representarse esta actuación y poner a la víctima en una situación de que no pudiese responder a un eventual ataque. Cree que la jurisprudencia y la doctrina han sido claras al respecto, en relación a las agravantes; el ministerio público no podrá dotar de contenido a dichas agravantes. Finaliza indicando que solicitará una pena ajustada a derecho, conforme a las atenuantes que ha invocado.

En su **alegato de clausura**, recuerda que en su alegato de apertura sostuvo que la prueba que se rendiría y apreciaría por el tribunal permitiría acreditar sin duda alguna un hecho objetivo, no discutido por la defensa: la muerte de la víctima y la participación de su representado en ella. Por otro lado, afirma que también sostuvo que lograrían acreditar la concurrencia de a lo menos tres circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, previstas en la legislación: la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, al haber confesado y haberse además denunciado, pudiendo eludir la acción de la justicia, fugándose u ocultándose. También se acreditó la irreprochable conducta anterior del acusado, que no fue cuestionada. Durante las jornadas del juicio oral declaró su representado, que renunció a su derecho a guardar silencio, y como lo hizo en un tiempo inmediato, reconoce haber dado muerte a la víctima, indicando en detalle el lugar donde ocurrió y cómo ocurrió, contextualizando su relato en el tiempo y espacio. En el mismo sentido prestó declaración un testigo de cargo, el funcionario Francisco Salgado, que tal y como declaró su representado, dio cuenta de que él llamó a Carabineros, por medio de su madre, y relató con detalle lo ocurrido. Concurrió con el personal policial a ese inmueble y como encargado autorizó, bajo acta, el ingreso al lugar, facilitando las llaves de la casa. Doña Teresa Salas, la madre del acusado, declaró en el mismo sentido, al igual que Julio Ayala, funcionario policial que también corroboró esta dinámica. Todo esto permite tener por configurada la atenuante del artículo 11 N° 8 y 11 N° 9 del Código Penal. Hace presente que esta investigación fiscal inició y culminó

en la flagrancia, específicamente con la declaración de su representado la madrugada del día 1 de febrero de 2019. Si su representado no hubiera señalado cómo, cuándo y dónde ocurrió el lamentable hecho que conllevó la muerte de la víctima, al día de hoy no estaríamos en esta audiencia; y por el contrario, hubiese ocurrido lo que en muchos otros casos en este tipo de delitos: la impunidad. Todo proviene desde una fuente única de información, como resulta ser la declaración de su representado y su autodenuncia. El perito de la defensa don César González ha manifestado que, una vez evaluada su pericia, su representado presentó características deficientes desde el punto de vista cognitivo, en un grado severo, diagnosticándose en una discapacidad intelectual leve y un síndrome prefrontal moderado, relacionado con un deterioro cognitivo, en relación con el consumo de sustancias ilícitas, específicamente droga. Su representado no posee mecanismos cognitivos que puedan orientarlo a tomar decisiones de una buena manera en circunstancias difíciles, con una dificultad evidente para prever circunstancias futuras, autodefinirse y autodeterminarse, entender así el alcance de sus actos. En este sentido, su representado presentaba al momento de los hechos una madurez cognitiva incompleta o no desarrollada en su totalidad, lo que a su juicio, permite responsablemente sostener la configuración de una atenuante de responsabilidad como es la del artículo 11 N° 1, en relación con el artículo 10 N° 1 del Código Penal, de imputabilidad disminuida.

Por otro lado, el ministerio público ha acusado a su representado como autor del delito de femicidio, en los

términos del artículo 390 y 390 bis del Código Penal, sosteniendo la configuración del delito en una supuesta convivencia previa que habría existido entre su representado y la ofendida. Invita a refrescar memoria sobre estos hechos, que ocurren en la madrugada del día 1 de febrero de 2019, tiempo evidentemente anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.212, que como es sabido, vino a modificar el tipo penal de femicidio en marzo del año 2020. Esto lo señala a propósito del principio rector de irretroactividad de la ley penal, más aun cuando esta resulta desfavorable para el imputado, toda vez que la norma vigente a la fecha de los hechos era el artículo 390, que cita al efecto. Lo que debe dilucidarse en esta instancia, y es lo que la defensa plantea respetuosamente, es si en el caso que nos convoca concurre o no este elemento de la convivencia, anterior o actual al momento de los hechos. En este sentido afirma que de la propia prueba de cargo, la testimonial del padre y hermana de la víctima, quienes usaron el término de convivencia o de exconvivencia para referirse a la relación que existía entre la víctima y el acusado, no puede desprenderse este elemento del tipo, porque esa palabra -convivencia- no está dotada del contexto necesario para entenderlo en los términos referidos en la norma vigente a la fecha de los hechos; no basta con esgrimir que para convivencia basta la coexistencia de dos seres humanos, o la existencia de una relación sentimental o tener un hijo en común, ello no es *per se* convivencia. El compartir solamente un techo común, o haber tenido periodos en que la víctima durmió o pernoctó en casa de familiares de su representado, no es suficiente para entender el concepto

de convivencia. Para hablar de convivencia se debe tener un proyecto común, que implica derecho y deberes, y que desde lo más simple, por ejemplo, conlleva tener llaves del inmueble que uno comparte con otra persona en calidad de conviviente; y desde lo más complejo, la división de tareas, de responsabilidades, de espacios. Hay hechos que conllevan la convivencia y tiene que ver también con el reconocimiento social de aquella, ninguno de los cuales resultó probado. En este mismo sentido, si bien se esboza en la prueba de cargo que hubo convivencia, no se acompaña nada a dicho término, no se señala con exactitud cuándo supuestamente tuvo lugar, pues de forma vaga se refirió situaciones interpretadas por los deponentes, como la familia de la víctima. A su juicio la prueba de descargo describió con más detalle en qué consistía el vínculo que unía a su representado con la víctima, que fue una relación de pololeo y luego una relación de padres de un hijo en común, pero que de ninguna manera constituye el tipo penal vigente a la época de los hechos. Insiste en que para dar lugar a la calificación jurídica, debe dotarse de contenido al término convivencia. De esta manera, lo que se plantea por la defensa es que la calificación jurídica que corresponde a estos hechos no es otra que la de homicidio simple, no el que pretende el ministerio público y la parte querellante.

En cuanto a las circunstancias agravantes invocadas por el ministerio público en su acusación, de actuar con alevosía y ejecutar el hecho en el contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor, afirma que también se

escuchó al ministerio público en su alegato de clausura esbozar una circunstancia agravante diversa a la señalada en la acusación, esto es, el artículo 390 ter, y el día de hoy esboza otra agravante, tampoco contemplada en su acusación, como es el ensañamiento. En primer término, solicita que desde ya se desestimen esas agravantes, por cuanto existe una infracción al principio de la congruencia. El ministerio público acusa por un hecho y solicita la aplicación de una determinada agravante en su acusación, por lo que a ella quedan ligadas sus alegaciones que sustente sobre las agravantes; de entenderlo de una manera distinta, habría una infracción al principio de congruencia, rector en nuestro sistema procesal penal. En relación a la agravante contenida en el artículo 390 quáter, que sí consta en la acusación, insiste en la necesidad de recordar lo expuesto acerca del principio de la irretroactividad de la ley penal. Para el caso de que el tribunal igualmente la estimase concurrente, expone que el elemento subjetivo que subyace a la agravante tampoco logró acreditarse en juicio; es más, la prueba de descargo lo desestimó. Sobre lo expuesto por la querellante en orden a fallar con perspectiva de género, sostiene que ello no puede conllevar una vulneración a un principio de objetividad, punto sobre el que es relevante entender que no se evidenció una retractación de la víctima, sino que nunca existió una denuncia. En cuanto a la alevosía, señala que el legislador ha esbozado su concepto en la misma norma, como obrar a traición o sobre seguro, por lo que debe determinarse una atribución fáctica de que el acusado se aprovechó o creó un estado de indefensión de la víctima. En el relato de los

hechos de la acusación, ningún elemento sustenta la alevosía, ni tampoco puede desprenderse de la prueba rendida.

La defensa no solicita la absolución de su representado, como lo adelantó en su alegato de apertura, sino que se le sancione conforme a derecho, conforme a la ley vigente al día de los hechos, sin afectar las garantías fundamentales que le protegen.

CUARTO: Que, el acusado, debidamente informado acerca de sus derechos, decidió prestar declaración y, en síntesis, dijo que ese día estaba en su casa, con su hijo. Le llega una llamada de la mamá de su hijo, diciéndole que estaba ocupada y en un rato más lo iba a llamar para que fueran a un local del centro, para compartir con su hijo. Habían quedado en eso el día anterior. Le dijo que bueno, porque su hijo estaba contento de que se iban a juntar a compartir algo entre los tres. Ella le dijo que en un rato le iba a avisar. Pasó como una hora, ocho u ocho y media, le dijo que se encontró con unos amigos y no podría llegar al local, que lo dejaran para otro día. Pasó un rato, ella lo volvió a llamar y le dijo si le gustaría compartir un trago con ella, como a las diez u once. Él respondió que le iba a preguntar a sus padres para que ellos se quedaran con el niño. Les consultó y lo fue a dejar a casa de sus padres. Fue donde estaba ella, a un restorán que se llama "La Roca". Se encontró con ella y había como cinco tipos compartiendo. Se puso a compartir, a beber unos tragos. Después de eso, los tipos se fueron a sus casas, por lo que al final se quedaron los dos solos. Su madre le había dicho que tenía que viajar en la madrugada, así que

tenía que llegar temprano a buscar a su hijo, cuestión que él dijo a Lisette, que tenía que irse temprano a cuidar a su hijo, a quedarse a su casa. Quedaron los dos solos en el local, y dijo que se tenía que ir, porque era tarde, como la una o un poco más. Ella dijo que no, porque quería seguir compartiendo, quería seguir tomando, a lo que él dijo que no porque le correspondía ir a cuidar a su hijo, en vez de estar tomando. Le dijo que si quería, que ella siguiera, a lo que esta le respondió que no, que quería compartir con él, y cómo su mamá no iba a poder quedarse con su hijo. Él se fue del local, caminó y ella lo siguió, diciendo lo mismo, que para qué se iba, que compartiera con ella. Estaban bajo los efectos del alcohol ya a esa hora y empezaron a discutir; él dijo que no iba a seguir bebiendo, porque tenía que cuidar a su hijo, esa era su responsabilidad. Incluso le ofreció dinero para que ella siguiera bebiendo, si lo quería, pero él tenía una dirección, que era la casa de sus padres, a buscar a su hijo. Ello lo siguió, alegó e insistió en cómo su mamá no iba a poder quedarse con su hijo, que era solo un momento. Llegaron a su casa, discutiendo; él fue a abrir la puerta, porque tenía las llaves de su casa. Empezaron a discutir, las cosas se subieron de tono, cuando ella llega y dice "qué te preocupai tanto del cabro chico si no es ni tuyo", y se le abalanza, se cae. Él reaccionó, la golpeó, recuerda que tomó un cuchillo y luego no recuerda más, hasta que la vio en el suelo, ensangrentada. No puede entregar más detalles, pues en realidad no recuerda ese momento. Cuando abrió los ojos, ella estaba en el suelo, botada, ensangrentada. Tenía miedo en ese momento. Apagó la luz de la cocina, se dirigió al baño, se

duchó y todavía no podía creer lo que había hecho. Se puso ropa y se fue casa de sus padres, porque no aguantaba, era muy dolorosa la imagen que tenía en su cabeza, tenía que decirle a alguien, sabía lo que había hecho y que tenía que pagar, no podía quedarse así. Llegó a casa de sus padres, y como ellos tenían que viajar, se levantaron al poco rato y les dijo, les contó. Les pidió que no viajaran, que llamaran a Carabineros. Él sabía que había dado muerte a la mamá de su hijo. Llegó Carabineros y le preguntaron si él estaba seguro de lo que decía, así que le pidieron llevarlos hasta el sitio donde estaba su casa, se bajó del furgón, abrió la puerta y lo tomaron detenido. Pide disculpas a la familia, aunque quizá no lo escuchen; a su hijo, que está muy arrepentido, que todavía no encuentra una explicación para lo que hizo, ni sabe cuál fue el motivo, que por favor lo perdonen.

Interrogado por el ministerio público, precisa que el nombre de la mamá de su hijo era Lisette Riffo. Su hijo se llama Alexander, tiene diez años; y a la fecha de los hechos, tenía seis o siete. Iba al colegio, estaba en primero básico. Él vivía en la casa de pasaje Jorge Carvajal, 1522 o 1532, población 27 de Febrero, Lebu. Esta era la casa de su tía, no recuerda cuánto tiempo llevaba viviendo ahí. Él cuidaba esa casa. La mayoría de las cosas eran de su tía. Nunca vivieron juntos con Lisette, solo fue un pololeo. Reconoce que declaró ante Carabineros, pero no tiene claro el horario. No dijo esa vez que recibió un llamado telefónico de su exconviviente. Se le contrasta por el ministerio público con su declaración ante la policía, en la cual lee "que el día de ayer, a eso de

las 22:00 horas, recibí un llamado telefónico de mi exconviviente Lisette Dayana Riffo Cayupán". Aclara que el funcionario empezó a hacerle como una entrevista. Él le puso, "¿ella estaba en tu casa?, Ah, entonces es tu exconviviente".

Alexander vivía con los padres de Lisette, aunque igual pasaba tiempo con él. Ella no vivía en casa de sus padres, no sabe dónde vivía, agregando que no estaba en la localidad. No sabe cuánto tiempo de relación tuvieron, porque era como esporádico. Él por su trabajo viajaba mucho, no tenían una relación estable, por eso estaban unos tres o cuatro meses y después terminaba la relación. Era intermitente, tenían una relación por meses, después terminaban y después volvían.

En la casa ella le gritó lo que señaló, se le abalanzó y cayó al suelo. Él la golpeó con puños, después tomó la cuchilla, pero ya no recuerda más, no sabría decir. Recuerda que estaba botada en el piso, ensangrentada, nada más. Dijo que luego se duchó y fue a casa de sus padres. En casa de sus padres esperó, durmió un rato, no sabía cómo explicarles lo que había sucedido. No tenía las palabras, porque no era fácil. Durmió en una pieza que tenía ahí. Les dijo un rato después. Él les dijo que llamaran a Carabineros. "Qué vamos a hacer", le dijeron, por eso ahí él les pidió llamar. Ese día había bebido, pero no se acuerda cuánto, al igual que Lisette. Era difícil saber cuándo ella estaba ebria, pues cada que vez que compartían, él era quien se curaba primero; le hacía más efecto el alcohol. Reitera que cursó hasta 1º medio, en el Liceo Politécnico B54 de Lebu. Trabajaba en esa

época, era pescador artesanal, no tenía problemas de carácter médico, solo que era hiperactivo, tenía hiperactividad.

Interrogado por la querellante, señala que su hijo iba al colegio, Graciela Miller. Le decían Escuela 1. Dijo tener una relación de pololeo con Lisette, por lo que se le pide que explique qué entiende por pololeo, señalando que "no tiene muy entendido en qué consiste". Su relación consistía en que en ocasiones salían a dar vueltas; en ocasiones ella iba a la casa de su abuelo, donde vivía él en ese tiempo, a veces él iba a casa de ella, donde sus padres. En ocasiones él se quedaba a dormir, era relativo, por su trabajo. Era una relación intermitente, no estable. No sabe dónde vivía ella cuando ocurrieron los hechos. Su hijo vivía también con él. Él se iba a trabajar y el niño se quedaba con su abuelo, cuando él volvía, se quedaba en su casa, precisando que era la casa donde ocurrieron los hechos. En su trabajo no tienen horarios fijos. Prestó declaración a Carabineros, pero no tuvo opción de leer esa declaración, solo lo que ha escuchado cuando su abogado le ha dicho. No tuvo opción de leerla. Su abogado le daba ciertos puntos de su declaración, no más.

Interrogado por la defensa, indica que conoció a la víctima el año 2010, más o menos. La relación de pololeo inició el 2011. Tuvieron un hijo de nombre Alexander. Cuando ella quedó embarazada, vivía en casa de sus padres. Cuando nació Alexander, vivía en casa de sus padres. Cuando salía a la mar, no tenía fechas u horas exactas de ida y regreso. Él se dedicó a ser pescador artesanal, desde que nació su hijo hasta que quedó en prisión preventiva. Cuando regresaba a la

comuna de Lebu, se quedaba en casa de sus abuelos. Después vivió en casa de sus padres y luego donde su tía, sin haber arrendado o comprado una casa; siempre vivió de allegado. Precisa que cuando dijo que la víctima no estuvo en la comuna de Lebu, correspondía al año 2015, a inicios de ese año. Regresó a fines de 2018, periodo durante el cual su hijo se quedó con sus abuelos y con él, alternadamente. Ella regresó a Lebu los últimos meses de 2018; volvió a vivir donde sus padres. Cuando ocurrieron los hechos, estaba cuidando la casa de una tía. La víctima no tenía llaves de la casa, ni tenía sus pertenencias personales; tenía ropa, pero poca, porque a veces concurría a la casa. Dijo que a veces ella se quedaba a dormir, cuando peleaba con su papá, porque tenía problemas con el alcohol y las drogas, y su papá nunca fue partidario de eso. Las veces que ella llegaba a su casa, era por esos problemas que tenía con su padre, que su padre la agredía y que su madre tampoco era partidaria del alcohol y las drogas. Llegaba con su hijo, así que él obviamente la acogía hasta que solucionara sus problemas. En relación a su declaración ante la policía, dijo que era en una sala apartada de la comisaría, donde había dos funcionarios, pero que no eran de Carabineros. Llegó y le dijeron que se sentara, que tratara de relajarse; él estaba nervioso y tenía miedo, angustia. Lo empezaron a entrevistar, tomando nota. En ningún momento le informaron sus derechos, sino que solo empezó a consultarle, haciendo una entrevista. Estaba escribiendo, pero no sabía con qué fin, solo le dijeron que lo iban a ayudar. Aclara que dijo que no eran carabineros, porque no vestían como tal. Esto se desarrolló todo en la madrugada del día 1 de febrero

de 2019, como lo mencionó. Al lugar llegaron como a las 02:00 horas y desde ahí en adelante hasta la hora que llamaron a Carabineros, que habrá sido como las 04:00 horas. Cuando él le contó lo sucedido a Carabineros estaba en *shock*, tenía miedo, angustia, cree que culpa, a raíz del momento que había vivido, que no es algo que se viva a diario, estaba en *shock* por las imágenes que tenía en su mente. Desde que ocurrieron los hechos, no ha vuelto a ver a su hijo, ni a nadie de la familia de la víctima, no ha tenido contacto con ellos.

En la oportunidad a que se refiere el artículo 338 inciso final del Código Procesal Penal, reitera que pide perdón a la familia de Lisette y que está arrepentido.

QUINTO: Que, el ministerio público rindió los medios de prueba que se reseñan a continuación:

I. Testimonial:

1. Asdrubal Apolinario Riffo García, R.U.N. N° 10.457.491-2, empleado.

2. Francisco Patricio Salgado Catrimán, R.U.N. N° 16.649.372-2, funcionario de Carabineros.

3. Julio César Ayala Contreras, R.U.N. N° 16.731.585-8, funcionario de Carabineros.

4. Anny Johanna Riffo Cayupán, R.U.N. N° 18.453.026-K, empleada.

5. Katherine Paulette Villanueva Salas, R.U.N. N° 17.897.639-7, labores de casa.

II. Pericial:

1. **Felipe Andrés Luna Lavín**, 15.201.435-K, médico legista del Servicio Médico Legal.

2. **Jonathan Rodolfo Venegas Fierro**, R.U.N. N° 16.965.075-6, capitán de Carabineros.

III. Documental:

1. Documento de atención de urgencia N° 14118294 de fecha 01 de febrero de 2019, del hospital Santa Isabel respecto del acusado.

2. Informe de autopsia N° VIII-CAÑ-06-19, de fecha 6 de febrero de 2019.

3. Cien fotografías sitio del suceso, víctima, imputado, evidencias y ropas, que corresponden a informe pericial 13-2019 de Labocar Concepción.

4. Resolución de medida de protección ante el Juzgado de Familia Lebu, respecto del menor de iniciales A.J.V.R., en causa RIT 1-2019.

5. Certificado de nacimiento del niño de iniciales A.J.V.R.

6. Certificado de defunción de la víctima, Lisette Dayana Riffo Cayupán.

IV. Evidencia material:

1. Un cuchillo de cocina marca Tramontina, con mango de madera.

2. Un palo de madera de 65 centímetros de largo.

SEXTO: Que, por su parte, la defensa rindió como prueba propia, la que se reseña a continuación:

I. Testimonial:

Teresa Yohana Salas Valderrama, R.U.N. N° 14.072.022-4, dueña de casa.

II. Pericial:

César Emilio González Araneda, cédula de identidad 15.854.522-5, psicólogo.

III. Documental (incorporada como prueba nueva):

1. Oficio 2881, de 23 de agosto de 2019, de la 2ª Comisaría de Lebu.

2. Certificación del Juzgado de Letras y Garantía de Lebu.

SÉPTIMO: Que, luego de valorar la prueba rendida en juicio, fue posible tener por establecidos los siguientes hechos:

El día 1 de febrero del año 2019, en horas de la madrugada, al interior del domicilio ubicado en calle Jorge Carvajal Pinto N° 1532, de la población 27 de Febrero, Lebu, Jordan Villanueva Salas, luego de sostener una discusión con su exconviviente y madre de su hijo, Lisette Dayana Riffo Cayupán, la agredió con golpes de puño en el rostro, con un trozo de madera en su cabeza y, con un cuchillo tipo

cocinero, la apuñaló en reiteradas ocasiones en el cráneo, hombro, rostro y brazo izquierdo, provocándole con el mismo cuchillo un extenso y profundo corte a la altura de su garganta, lesiones que finalmente le provocaron la muerte, como consecuencia de un traumatismo cervical complicado. Luego del hecho, el acusado se bañó, limpiándose de esta forma las manchas de sangre con las que había quedado, abandonando el inmueble y trasladándose hasta la casa de sus padres.

Los hechos antes expuestos se tuvieron por acreditados en virtud de la declaración de los testigos **Salgado** y **Ayala**, quienes permitieron fijar el sitio del suceso en horas de la madrugada del día 1 de febrero de 2019, en el domicilio de Jorge Carvajal N° 1532 de la comuna de Lebu. En efecto, el testigo **Salgado** indicó que ese día, alrededor de las 04:35 horas, recibieron un llamado radial de CENCO, pidiéndoles que se trasladaran hasta el domicilio de Santa Fe N° 1046 de la población 27 de Febrero de Lebu, lugar en donde el imputado confesó el crimen, indicando que los hechos habían ocurrido recientemente, en el domicilio de Jorge Carvajal N° 1532, de la misma población y comuna. Estos hechos fueron reafirmados por la declaración del testigo **Ayala**, quien se entrevistó con el acusado en virtud de una instrucción del fiscal, también ese día en horas de la madrugada, a las 05:20 horas. El lugar coincide también con sitio en donde se realizó el informe planimétrico, por el perito **Venegas**, quien concurrió hasta ese inmueble a las 06:20 horas de ese día, casa que además

reconoció y se apreció por el tribunal en las fotografías N° 1, 4 y 5 del set de 100.

La relación entre el acusado y Lisette como padres de un hijo en común, se acreditó con el mérito del certificado de nacimiento de Alexander, nacido el día 13 de septiembre de 2011, en donde consta bajo el acápite de padre y madre, la individualización de víctima e imputado de esta causa.

La relación de exconvivencia existente entre el acusado y Lisette, se tuvo por acreditada en virtud del testimonio del señor **Riffo García**, padre de la víctima, quien señaló que su hija quedó embarazada de Jordan a los 16 años, conociendo él al acusado recién al sexto mes de embarazo, calificándolo como una persona violenta, agrandada y sin respeto; y que una vez que nació Alexander, este fue a buscar a Lisette a su casa, siendo irrespetuoso con su señora, yéndose a vivir a la casa de unos abuelos, donde la agredió, aunque Lisette lo negaba. El niño tenía cuatro o cinco meses cuando se la llevó a casa de sus abuelos, donde estuvieron, cree, más de un año, pues luego se fueron a vivir a casa de una tía. Por su parte, la testigo Anny **Riffo Cayupán**, hermana de Lisette, sobre este punto señaló que la víctima y el acusado vivían juntos desde que nació Alexander, oportunidad en la cual se fueron a vivir a la casa de los abuelos de Jordan y después a casa de su tía, reiterando también el hecho de que su hermana llegó golpeada, pero que siempre daba excusas. De la declaración de estos dos testigos, se puede colegir que entre el acusado y la víctima sí existió una relación de convivencia, a lo menos en el periodo posterior al nacimiento de Alexander, toda vez

que ambos coinciden en que durante esa época la pareja se fue a vivir a la casa de los abuelos de Jordan, agregando un detalle que, más allá de la influencia que pueda tener en este juicio, otorga a su relato una mayor credibilidad: que cuando llegó desde allí, volvió golpeada, lo que atribuía a accidentes domésticos. Esta versión de los hechos se prefiere a la sostenida por la testigo **Villanueva Salas**, en orden a que su hermano y la víctima nunca vivieron juntos; que nunca tuvieron una convivencia de familia, pues su relato no aborda el periodo posterior y cercano al parto; y al ser contrastada por el ministerio público con su declaración previa, se logró determinar que en dicha oportunidad declaró que la pareja vivió aproximadamente como un año en el pasaje Jorge Carvajal N° 1532, cuestionando la testigo que nunca dio un número de la dirección, pues solo la conocía como "la casa la tía". Esta parte de la declaración contrastada concuerda, además, con la declaración conteste de los testigos **Riffo García** y **Riffo Cayupán**, en el sentido de que luego de haber vivido donde los abuelos de Jordan, vivieron en casa de una tía. Más allá de los dichos de la testigo **Villanueva Salas**, no se aportó por la defensa ningún antecedente objetivo de que haya existido un proceder irregular por parte de la policía al tomar su declaración, máxime cuando lo único cuestionado parece ser un tecnicismo a los ojos de un lego frente a un hecho de sangre: si los padres de un hijo en común habían o no, en algún punto de su vida, convivido, todo lo cual lleva a otorgar más valor probatorio a la declaración del padre y hermana de Lisette. En igual sentido, por su carácter de inespecífica -máxime si se trata de un hecho negativo y no se

refiere a ninguno que, siendo positivo lo contradiga-, se desestima la declaración de la testigo **Salas Valderrama**, quien manifestó que su hijo y Lisette no tuvieron nunca una relación de pareja, de vivir juntos, y que no había otra relación entre ellos, aparte del hijo que tenían. La actividad de la defensa sobre este punto no logró levantar ninguna duda razonable, por cuanto dirigió sus preguntas al testigo **Salgado** y al perito **Venegas** sobre la base de si en el sitio del suceso se advirtió la presencia de artículos personales de la víctima, o si se revisó la casa en busca de ellos, cuestión irrelevante, por cuanto como consta en la acusación, el elemento del tipo en virtud del cual se atribuyó responsabilidad, era la calidad de *exconviviente*, por lo que si en esa casa había o no algún elemento personal de la víctima, como sería esperable si convivieran, resulta intrascendente para efectos de esta causa. En este mismo sentido, sus preguntas dirigidas al testigo **Ayala** y a la testigo **Villanueva Salas**, contrastando la afirmación de que la pareja habría convivido también en la población 27 de Febrero, pues esta fue entregada en marzo de 2014, época que no coincidiría con el nacimiento de Alexander el año 2011, cabe señalar que, en primer lugar, el periodo de convivencia que se estimó suficientemente acreditado es el que ocurrió en casa de los abuelos del acusado, cuando Alexander tenía cuatro o cinco meses (o sea, ya bien iniciado el año 2012), y que se extendió "más de un año", por lo que tratándose de relatar un hecho ocurrido hace más de ocho años, la expresión "más de un año", concuerda con la época que el testigo **Riffo García** fijó en su declaración; y resulta esperable conforme a

la dinámica de vida en pareja: si se vive de allegado junto a sus abuelos, aparece como razonable trasladarse a otro sitio más privado si se tiene la oportunidad, como lo sería cuidar la casa deshabitada de una tía.

Las lesiones de la víctima se tienen por acreditadas en virtud de la declaración del perito **Luna**, quien al evacuar su informe de autopsia, expuso que la víctima presentaba una gran cantidad de lesiones, respecto de las cuales las tres principales eran una herida en *scalp*, de 10x15 centímetros, en la zona parietal posterior derecha y occipital derecha, que compromete el cuero cabelludo, expone la calota, y expone una fractura occipito temporal derecha y una equimosis de 4x3 retroauricular derecha. Otra lesión, horizontal, de 6x1 cm, de bordes rosados, retraídos, en el tercio medio de la cara anterior del cuello, que se ubica a 138 cm del talón derecho desnudo y a 17 cm del acromion derecho; que compromete piel, tejido celular subcutáneo, músculos cervicales, vasos sanguíneos cervicales y expone una lesión 3x1 cm en el cartílago cricotiroideo de la laringe, que expone el lumen de la laringe con el exterior. Otra lesión es una herida en forma de ojal, de 2x0,5 cm, en la cara anterior tercio inferior del cuello, a 134 cm del talón derecho desnudo y a 14 cm del acromion, con un trayecto de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, que perfora la unión de las venas subclavia derecha y yugular derecha. Además de estas lesiones, presentaba una serie de hematomas y equimosis: un hematoma en la zona frontal derecha, palpebral periorbitaria derecha y el tercio medio del tabique nasal

derecho, de 11x7 cm; otro hematoma de 10x5 cm, en la cara lateral de la mejilla derecha; una equimosis de 5,5x4 cm, en el tercio lateral de la cara posterior del hombro derecho. Además presentaba una gran cantidad de heridas cortantes y cortopunzantes, que se ubicaban en la zona parietal derecha, dos en la zona retroauricular derecha, otra en la mejilla derecha, en la cara anterior derecha del cuello: dos en el tercio superior y dos en el tercio inferior; en la cara lateral izquierda del cuello: una en el tercio medio y otra en el tercio inferior; otra en la cara inferoexterna de la mama derecha; otra en la cara superior del hombro derecho, otra en la cara lateral de la escápula; otra en la cara lateral, tercio superior del brazo derecho; dos en la cara posterior del antebrazo derecho; una en la cara anterior del antebrazo derecho; una en el tercio distal de la cara lateral del muslo derecho; otra en la segunda falange del índice derecho; otra en la segunda falange cara posterior del dedo medio derecho; y otra en la cara posterior de la tercera falange del dedo medio de la mano izquierda. Al examen en la cabeza presentaba, en el cuero cabelludo, la lesión antes mencionada, junto con hematomas en la misma zona y un hematoma parieto temporal izquierdo. El cráneo presentaba una fractura tanto en la calota occipito temporal derecha y otra en la base del cráneo que comprometía el occipital, el temporal y el esfenoide derecho. El encéfalo, el cerebro, presentaba una hemorragia subaracnoidea fronto temporo parietal izquierda. A nivel del tórax, se observaba un hematoma de 7x7 cm, bajo la clavícula derecha; un infiltrado sanguíneo de 7x4 cm en la zona del pectoral derecho y una

perforación del quinto espacio intercostal derecho. Los órganos internos, tanto torácicos como abdominales, no presentaban lesiones. Se le realizó exámenes de alcoholemia y de sangre para determinar drogas de abuso y se estamparon sus huellas digitales en el formulario para la identificación. Se concluye que se trata de la autopsia de un adulto de sexo femenino, identificado por huellas digitales como Lisette Dayana Rizzo Cayupán, de 23 años de edad. La causa de muerte es un traumatismo cervical complicado, secundario a una agresión por elemento cortopunzante. Todas las lesiones descritas son vitales, recientes, coetáneas; y la lesión de una herida 6x1 cm, en la cara anterior del cuello, por acción de elemento cortopunzante, es necesariamente mortal. La lesión descrita como herida en *scalp*, por acción de elemento contundente, es potencialmente mortal; y la lesión de 2x0,5 cm que se encuentra bajo en el tercio inferior de la cara anterior del cuello, es una lesión de difícil sobrevida, a pesar de un tratamiento médico oportuno. Fueron cerca de veinte lesiones explicables por un elemento cortopunzante, tanto en la cabeza, cara, cuello, tórax derecho y extremidad inferior derecha. La declaración del perito, que fue reafirmada con la exposición de las imágenes contenidas en su informe de autopsia, que le sirvió para volver sobre su exposición y describir ante el tribunal en detalle las lesiones que constató en su pericia, junto al resto de la prueba permite reconstruir la dinámica de los hechos antes expuesta. La descripción de los hematomas en cercanía de la zona nasal, permiten acreditar que a la víctima se le propinó golpes de puño en el rostro, por cuanto de los elementos

levantados en el sitio del suceso, no se advierte otro elemento más compatible con aquellas, ya que el puño es un elemento contundente apto como para provocar un hematoma, pero no tan rígido, como para, de ordinario, producir otras lesiones más graves en la piel. Por otro lado, la herida en *scalp*, de 10x15 cm, que comprometió el cuero cabelludo de la víctima, y expuso la calota y una fractura occipito temporal derecha, resulta compatible con se le haya agredido con un trozo de madera en su cabeza, según se pudo advertir en la declaración del perito **Venegas**, quien al exponer y describir las fotografías N° 21 y 23 del set de 100, dio cuenta de un palo que fue levantado desde el sitio del suceso, y que incorporado materialmente al juicio, fue reconocido por él; en este trozo de madera pudo advertirse la existencia de rastros de sangre, sin que en el sector desde donde fue levantado presentara manchas por salpicaduras, por lo que lo más probable es que con él se haya golpeado a la víctima para depositarlo luego en ese lugar y, por su naturaleza, es un medio idóneo para causar la grave lesión que expuso el perito **Luna**, y se apreció por el tribunal en las fotografías N° 4 y 5, anexas a su informe. En lo que respecta a las lesiones causadas por un elemento cortopunzante, conforme también a lo expuesto por el perito **Luna**, la víctima sufrió diversas lesiones cortantes y cortopunzantes en su cuerpo, alrededor de una veintena, que en términos corrientes, según pudo identificarse además en las fotografías anexas a su informe, corresponden con el cráneo, hombro, rostro y brazo izquierdo, advirtiéndose un extenso y profundo corte a la altura de su garganta, lesiones que finalmente provocaron su muerte, como

consecuencia de un traumatismo cervical complicado, según concluyó el facultativo. Estas lesiones resultan compatibles con el cuchillo de cocina que se levantó desde el sitio del suceso y que el perito **Venegas** describió junto al cuerpo de la víctima en la fotografía N° 17 del set de 100; y en la N° 22 del mismo set, además de que fue incorporado al juicio como evidencia material, reconocido por él mismo como el que levantó ese día, aún con manchado de sangre. La lesión que el perito **Luna** describió como de 6x1 cm, de bordes rosados, retraídos, en el tercio medio de la cara anterior del cuello, ubicado a 138 cm del talón derecho desnudo y a 17 cm del acromion derecho, y que comprometió la piel, tejido celular subcutáneo, músculos cervicales, vasos sanguíneos cervicales y expuso una lesión 3x1 cm en el cartílago cricotiroideo de la laringe, que la conecta con el exterior, por la zona en que se produjo y sus dimensiones, bien puede calificarse, como se hizo en la acusación, de "un extenso y profundo corte en la garganta", lesión que en opinión del perito fue necesariamente mortal.

La circunstancia de que el acusado luego del hecho se bañó para quitarse los rastros de sangre, se acredita en virtud de la declaración del perito **Venegas**, quien manifestó que al llegar al lugar de los hechos y dirigirse al baño, allí observó un bóxer masculino, totalmente humedecido, según se apreció en las fotografías N° 26 y 27 del set de 100, hecho que si se analiza a la luz de las fotografías N° 15, 17 22 y 24, entre otras, del mismo set, permite concluir que por la abundante cantidad de sangre en la cocina, piso, muebles y

puerta, el autor de los hechos necesariamente debía bañarse para abandonar el lugar sin levantar sospechas, cuestión que es compatible con la ropa interior que se encontró, mojada, en la tina del baño.

En cuanto a que el acusado se dirigió a la casa de sus padres luego del hecho, se acredita en virtud de lo expuesto por el testigo **Salgado**, quien concurrió al domicilio de Santa Fe N° 1046, casa de los padres del acusado, lugar donde este se denunció y confesó el delito. Si se tiene presente que el perito **Luna** estimó como data de muerte de ocho a doce horas a contar de la autopsia, a las 12:15 horas de ese día; y que el testigo **Salgado** recibió el llamado de CENCO a las 04:35 horas de esa madrugada, cabe concluir que luego de ocurrido el hecho, y después de bañarse, el acusado concurrió a casa de sus padres, donde se denunció, coincidiendo los tiempos con lo expuesto en su propia declaración.

La participación del acusado se tuvo por acreditada en virtud de la declaración del testigo **Ayala**, quien describió la dinámica relatada por Jordan cuando confesó el hecho, que fue concordante, en parte, con la que expuso el encartado en juicio. El mismo testigo, dio cuenta de que según la madre del acusado, este se había encontrado con Lisette antes de los hechos. De esta forma, si se considera que la víctima fue hallada sin vida en el inmueble de Jorge Carvajal 1532, donde solamente vivía el imputado; y que en el baño del lugar se encontró una pieza de ropa interior masculina, mojada, que debido a la gran cantidad de sangre en el lugar, resulta compatible con que el autor, también ensangrentado se bañara,

detalles que fluyen de la declaración del perito **Venegas**, no cabe sino concluir, más allá de toda duda razonable, que fue el acusado quien dio muerte a Lisette.

Se desestima el valor probatorio del acta del Juzgado de Familia, por cuanto nada aporta a los hechos materia de la acusación, dando cuenta, además, de un hecho posterior a los que son objeto del juicio. Se desestima igualmente el mérito probatorio del Oficio N° 2881, de 23 de agosto de 2019, de la 2ª Comisaría de Lebu y de la certificación del Juzgado de Letras y Garantía de Lebu, por cuanto con ellos se intentó cuestionar la veracidad la declaración del testigo **Riffo García** sobre la existencia de denuncias previas, pero este testigo refirió lo que comentó Lisette, por lo que el hecho de que haya existido una discordancia entre lo dicho por la víctima y lo que consta en esos documentos, no afecta a la veracidad del resto de su relato, en tanto dio cuenta de hechos que él mismo vio, conoció y percibió.

OCTAVO: Que, los hechos fijados previamente, configuran el delito de femicidio, ilícito previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal.

La norma legal citada, conforme a su versión vigente a la época de los hechos, dispone que "El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado", agregando su inciso

segundo que, "Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio".

Según se expuso en el motivo anterior, las lesiones que se produjeron a Lisette causaron su muerte, acreditada desde el punto de vista legal con su certificado de defunción. Las lesiones, como lo concluyó el perito **Luna**, fueron de tipo homicida, por cuanto no solo tres de ellas eran aptas para causarla, sino que una -el corte de 6x1 cm en el cuello- era necesariamente mortal. Del análisis de la multiplicidad de lesiones, en particular de las tres más graves, no puede sino concluirse la existencia de un dolo directo de matar, pues el solo hecho de utilizar dos medios: un trozo de madera y un cuchillo -además de los puños- permite concluir que existió un tiempo para que el sujeto activo tomara conciencia del hecho que estaba ejecutando, que no era sino atacar, hasta matar, a otra persona.

En cuanto a la calidad del acusado, de exconviviente de la víctima, si bien la defensa afirmó que para el Derecho penal ser conviviente es más que solo cohabitar, e implica una dinámica más compleja, más allá de la existencia de una relación sentimental o tener un hijo en común, es justamente eso lo que se acreditó en juicio. En primer término, debe tenerse presente que según la norma del artículo 390 inciso 2º de Código Penal, lo que se hizo por el legislador el año 2010, fue brindar la misma protección penal de las uniones matrimoniales a las de hecho, reconociendo así la igualdad de derechos en el ámbito penal para ese tipo de familias. Visto

desde esa perspectiva, y al igual que en un matrimonio, el aspecto material es del todo secundario: dónde viven, cuánto viven juntos, si uno de los integrantes de la díada trabaja fuera del hogar por días o semanas, etc., pues lo relevante es este plan y proyecto de vivir como una familia. En este contexto, si se considera que como consta en el certificado de defunción, Lisette nació el 9 de marzo de 1995, a los cuatro o cinco meses de nacido Alexander, ella tenía entre dieciséis y diecisiete años, por lo que aún era menor de edad, contexto en el cual, al haberse ido a vivir con Jordan donde sus abuelos, sin que sus padres hayan hecho valer la calidad de menor de edad de quien a la época era una adolescente, no podía sino entenderse que lo hacían como pareja, con un proyecto común: formar una familia junto a su hijo de cuatro o cinco meses de edad. La ausencia de una medida de protección por parte de la familia de Lisette al abandonar su hogar, permite concluir que desde el punto de vista social, gustase o no a sus padres, no podían sino entender que al tener un hijo en común e irse a vivir juntos, pretendían formar su propia familia, convivencia que desde el primer día fue suficiente para satisfacer el requisito del tipo penal. Por esta razón, se desestimó la petición de la defensa en orden a recalificar estos hechos como un homicidio simple, toda vez que en la especie se cumplen todos y cada uno de los elementos del tipo penal de femicidio.

Como se adelantó en el veredicto, se descarta cualquier referencia al tipo del artículo 390 bis, toda vez que, como resultó acreditado y consta en la misma acusación, los hechos

ocurrieron el día 1 de febrero de 2019, esto es, más de un año antes de que entrara en vigencia la Ley N° 21.212, que introdujo diversas modificaciones al Código Penal en materia de femicidio. Lo anterior, por cuanto uno de los principios más elementales de aplicación de la ley penal en el tiempo es su irretroactividad (*nullum crimen sine lege praevia*), normativamente contenida en el artículo 18 del Código Penal, que sobre el particular dispone "Ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración", en perfecta consonancia con el artículo 19 N° 3 inciso 8° de la Constitución, que en este punto reconoce que "Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado"; y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este contexto, aplicar en este caso el tipo penal del artículo 390 bis, como pretendía el persecutor, implicaría aplicar retroactivamente una ley penal posterior, que resulta más perjudicial para el acusado, toda vez que establece elementos del tipo menos exigentes -de aplicarse la ley vigente hoy, la convivencia entre el acusado y la víctima, que ocupó buena parte del juicio, hubiera sido irrelevante al existir un hijo en común- y agravantes que a la época de comisión no existían. En consecuencia, por más deleznable que resulte un crimen, el respeto al principio de legalidad impide aplicar retroactivamente una ley penal más perjudicial para el acusado, como debe ocurrir en un Estado

de Derecho, cuyo resguardo corresponde a los tribunales que establece la ley.

NOVENO: Que, la participación del acusado se tiene por establecida a título de autor ejecutor directo, por cuanto fue él mismo quien golpeó con sus puños y un palo; y apuñaló a la víctima, su exconviviente, causando su muerte, por lo que ejecutó por sí mismo la totalidad de la conducta típica de femicidio.

Debido a que la acción del acusado culminó en la muerte de la víctima, el delito se encuentra en grado de desarrollo consumado.

DÉCIMO: Que, en lo que respecta a la agravante del artículo 12 N° 1 del Código Penal, esto es, la alevosía, se descartará que haya concurrido, por cuanto de la dinámica de los hechos acreditada en juicio -y más allá de la violencia del delito-, no puede concluirse que el acusado haya obrado técnicamente a traición o sobre seguro. Lo anterior por cuanto el "concepto central en materia de alevosía está orientado hacia la seguridad para el hechor, tanto por lo que toca al buen éxito de su empresa como a la incolumidad de su persona y su posterior impunidad"¹, nada de lo que se haya acreditado en juicio; y como bien sostuvo la defensa, sin que exista en la acusación una descripción fáctica que funde esta agravante. En efecto, no se imputó ni acreditó la existencia de una especial actitud moral, como es la traición, que se traduce en la "ocultación de las verdaderas intenciones, de

¹ ETCHEBERRY, Alfredo, *Derecho penal. Parte especial* (Santiago, 1999), Tomo III, p. 59.

tal modo que la víctima no desconfíe del hechor, el cual responde a esa confianza dando muerte al ofendido”²; o que se haya obrado sobre seguro, esto es, con “la concurrencia de circunstancias que objetivamente aseguren, sea la ejecución del delito, sea la integridad del agente ante la eventual reacción de la víctima”³. Tal y como se reconoció por el perito **Venegas**, al describir la fotografía N° 20 del set de 100, en la cocina había signos de una lucha, por lo que los hechos aparecen más bien ajustados a una discusión que se zanjó por el acusado con la violencia plasmada claramente en juicio, pero sin que existan antecedentes de haber obrado con alevosía en los términos exigidos por el legislador, pues la víctima trató de defenderse, sin éxito.

En lo que respecta a la agravante del artículo 390 quáter N° 4 del Código Penal y la figura del artículo 390 ter N° 4 del mismo cuerpo legal -que el ministerio erróneamente calificó como agravante, pero en realidad es un tipo especial de femicidio, no íntimo-, cabe reiterar lo antes expuesto en relación a la aplicación temporal de la ley penal, por cuanto se trata en ambos casos de modificaciones introducidas por la Ley N° 21.212, de fecha 4 de marzo de 2020, más de un año después de ocurridos los hechos. Por esta razón, no siendo el artículo 390 ter N° 4 una agravante -y de hecho ni siquiera fue invocada en la acusación-; y siendo el artículo 390 quáter N° 4 del Código una agravante que fue introducida con posterioridad, ambas serán desestimadas.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, pp. 60-61.

En atención a la agravante del artículo 12 N° 4 del Código Penal, que fue invocada por el ministerio público en su alegato de clausura, y como también se adelantó en el veredicto, cabe recordar que ella no se encuentra contenida en la acusación, como lo ordena el artículo 259 letra c) del Código Procesal Penal, que al efecto prescribe "La acusación deberá contener de forma clara y precisa: [...] c) La relación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal". En virtud de la claridad y precisión de la disposición legal transcrita, el ministerio público no puede pretender que, recién a raíz de su alegato de clausura, el tribunal considere como concurrente alguna circunstancia de responsabilidad penal, respecto de la cual la defensa recién se pudo enterar después de haberse rendido ya toda la prueba, pues ello atentaría abiertamente en contra de uno de los principios más básicos del debido proceso: conocer en detalle el contenido de la acusación sobre la cual el imputado debe defenderse, resguardado normativamente en este caso por el deber de congruencia. Tampoco puede pretender el persecutor, que en virtud del ejercicio de la facultad conferida en el inciso 2° del artículo 341 del Código Procesal Penal, sea el tribunal quien aprecie igualmente una agravante no contenida en la acusación, pues a la luz de todo lo antes expuesto, sobre la pretensión de aplicar retroactivamente una ley penal más perjudicial al acusado y omitir consignar en la acusación una agravante que se estime concurrente, en este caso ello constituiría un patente subsidio a la actividad persecutora del ministerio público que, a pesar de la naturaleza del

delito, su gravedad y repercusión social, obró con notoria desprolijidad en el acto procesal más relevante a su cargo: la acusación.

En cuanto a la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, conforme al mérito del extracto de filiación y antecedentes del acusado, sin anotaciones, no cabe sino reconocer que goza de irreprochable conducta anterior, como lo consignó el ministerio público en su acusación y lo reafirmó la defensa en sus alegaciones.

Sobre la atenuante del artículo 11 N° 8 del Código Penal, como también se adelantó en el veredicto, el hecho afirmado por la defensa, en relación a que el acusado pudiendo eludir la acción de la justicia, se denunció y confesó el delito, tiene sustento en un elemento de la acusación que se acreditó en juicio: que luego del hecho, el acusado se bañó, limpió sus manchas de sangre y concurrió al domicilio de sus padres. En este contexto, el acusado tuvo tiempo y la oportunidad, no solo para huir, sino que para intentar -con mayor o menor posibilidad de éxito, como ha sido de público conocimiento en casos análogos- ocultar el cuerpo del delito y las huellas de aquel, por lo que haberse denunciado y confesar el crimen, constituye una circunstancia objetiva que debe reconocerse como atenuante, ya que se satisface la hipótesis del artículo 11 N° 8 del Código Penal.

Respecto a la atenuante de eximente incompleta alegada por la defensa, del artículo 11 N° 1 del Código Penal, en relación al artículo 10 N° 1 del mismo cuerpo legal, la

prueba rendida no logró acreditar que la particular condición del acusado haya influido de manera relevante en el ilícito, como para configurar la atenuante invocada. En efecto, de la declaración del perito **González**, consta que en el acusado se constató una discapacidad intelectual leve, un daño orgánico por un consumo excesivo de drogas, dando lugar a un trastorno de consumo de drogas, en un periodo de abstinencia de tres años; y a la vez un síndrome prefrontal, conforme al cual sus características cognitivas, en momentos de alto estrés, y sus mecanismos de control e inhibición, se ven afectados. Sin embargo, no se incorporó prueba suficiente para acreditar que esta condición del acusado haya influido de forma decisiva en el delito de que se trata, dando lugar a que, por una causa independiente de su voluntad, se hallase privado parcialmente de razón, toda vez que este se trata de uno de los delitos más graves de nuestra legislación y se funda en uno de los principios universalmente compartidos, más básicos de nuestra sociedad: no matar a otro, contexto en el cual, para sustentar que se configure una atenuante como la solicitada, se requiere contar con un examen más específico y realizado directamente a la luz del delito de que se trata, resultando insuficiente la sola prueba pericial psicológica incorporada para acreditar que el acusado obró sobre la base de una imputabilidad disminuida.

Finalmente, en lo que respecta a la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, se debe tener presente que ya se reconoció como atenuante que el acusado se denunciara y confesara el crimen, parte inherente de lo cual es aportar

los antecedentes que lleven a su comprobación, como señalar el lugar y facilitar las llaves, por lo que tal conducta ya ha sido ponderada por el tribunal. En este contexto, debe recordarse que para que una colaboración se califique como sustancial, esta “no ha de limitarse a proporcionar detalles intrascendentes, sino constituir un aporte efectivo y serio al éxito de las averiguaciones, aunque no es preciso que se traduzca verdaderamente en resultados concretos”⁴. En este caso, se cometió el delito en la casa que habitaba el acusado sin que allí viviera otra persona, por lo que atendida la particular relación entre ambos, como padres de un hijo en común, y la naturaleza del hecho, incluso omitiéndose la declaración del acusado, igualmente podía determinarse cuál había sido su participación. Por otro lado, la declaración judicial del acusado eludió la clara relación de convivencia que tuvo con la víctima, señalando que se trataba solo de un pololeo; pero consultado por la querellante acerca de qué entendía él por pololeo, no supo explicarlo al tribunal, por lo que su declaración judicial y renuncia a guardar silencio no puede tampoco, por sí, considerarse como una colaboración sustancial.

UNDÉCIMO: Que, en lo que respecta a la pena a imponer, se debe tener presente que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 390 del Código Penal, la pena asignada en abstracto para este ilícito corresponde al presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. En este

⁴ Excma. Corte Suprema, Rol N° 5741-2005, 3 de enero de 2006, en VERDUGO MARINKOVIC, Mario, *Diccionario de jurisprudencia judicial chilena (2000-2014)* (Santiago, 2015), s. v. “Colaboración con la justicia”.

contexto, teniendo presente que al acusado le benefician dos circunstancias atenuantes y no le perjudican agravantes, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 del Código Penal, se rebajará la pena en un grado, circunscribiéndose esta al presidio mayor en su grado medio. Dentro de este grado, teniendo particularmente presente la naturaleza del hecho y que si bien por las razones técnicas antes expuestas resulta improcedente considerar el ensañamiento para fundar una agravante, el mal causado por el delito fue muchísimo más allá del mínimo que era necesario para consumarlo, utilizando dos medios diversos para ello: un trozo de madera, con el cual se golpeó la cabeza de la víctima, y un cuchillo, con el cual se la apuñaló; y que la repercusión de este ilícito afectó a la familia inmediata de Lisette, privando a Alexander de su madre, y al resto de su familia de su hija y hermana, es que se fijará la cuantía exacta de la pena en el máximo del grado, esto es, en quince años de presidio mayor en su grado medio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por los artículos 1°, 11 N° 6 y 8, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 28, 31, 50, 68, 69 y 390 del Código Penal; artículos 47, 295, 297, 340, 341 y 342 del Código Procesal Penal, **SE DECLARA:**

I. Que **SE CONDENA** a **JORDAN ALEXANDER VILLANUEVA SALAS**, ya individualizado, a la pena de **quince años** de presidio mayor en su grado medio, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de femicidio, en grado

de desarrollo consumado, cometido contra su exconviviente, Lisette Dayana Riffo Cayupán, el día 1 de febrero de 2019, en la comuna de Lebu.

Durante la fase de ejecución de la sentencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970, Gendarmería de Chile obtendrá la huella genética del condenado, para que esta sea incorporada al Registro Nacional de ADN.

II. Que, atendida la extensión de la pena privativa de libertad impuesta, deberá cumplirla de manera efectiva.

Le servirá como abono todo el tiempo que ha permanecido privado de libertad en esta causa, primero detenido y luego sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, de forma ininterrumpida, a contar del 1 de febrero de 2019.

III. Que, se exime al condenado del pago de las costas, al haber sido representado por la Defensoría Penal Pública, en relación a lo dispuesto por el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales, en relación al artículo 36 de la Ley N° 19.718, y al artículo 47 inciso final del Código Procesal Penal.

Dese oportuno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, por el Juzgado de Letras y Garantía de Lebu.

Devuélvanse los documentos que se hubieren incorporado.

Quedan en este acto notificados todos los intervinientes de la sentencia antes pronunciada.

Redactada por el juez titular Marcos Pincheira Barrios.

RIT 32-2021

RUC 1900123249-8

Dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, integrada por los jueces don Ricardo Andrés Piña Vallejos, don Jaime Rodrigo Vejar Carvajal y don Marcos Antonio Pincheira Barrios. No firma el magistrado señor Vejar, por encontrarse de regreso en su tribunal de origen.